

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

ADVERTENCIA OFICIAL.

Las leyes y disposiciones generales del Gobierno, son obligatorias para cada capital de provincia donde se publican oficialmente en ella, y desde cuatro días después para los demás pueblos de la provincia. (Ley de 28 de Noviembre de 1857). Las disposiciones de las autoridades, excepto las que sean a instancia de parte no poble, se insertarán oficialmente como asimismo cualquier resolución emitida al servicio de la Nación que dimanase de las mismas, pero los de interés particular pagarán su inserción, entendiéndose en este último caso con el Editor del Boletín.

SE PUBLICA TODOS LOS DIAS PARES.

PRECIOS DE SUSCRIPCION.—En Orense, por trimestre, 5 pesetas.—Para fuera de esta capital, franco de porte, por trimestres adelantados, 7 pesetas.—Números sueltos, 38 céntimos. Se suscribe en esta capital, Imprenta de José M. Ramos y Antonio Otero, Colón, núm. 16.—En las demás provincias, en las principales librerías.

PRIMERA SECCION.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA.

DEL CONSEJO DE MINISTROS.

SS. MM. el Rey Don Alfonso

y la Reina Doña María de las Mercedes se encuentran en el Real Sitio del Pardo sin novedad en su importante salud.

SS. AA. RR. la Serma. Señora Princesa de Asturias, V. A. S. de Penismas Stas. Infantas Doña María del Pilar, Doña María de la Paz y Doña María Eufemia disfrutan de igual beneficio en esta Corte.

(Gaceta núm. 19)

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REAL ORDEN.

Remitido a informe del Consejo de Estado el recurso de alzada interpuesto por D. Eliseo Valcárcel contra un acuerdo de esa Comisión provincial, confirmatorio de otro del Ayuntamiento de Mula, sobre continuación de unas obras en una casa de su propiedad, la Sección de Gobernación de este alto Cuerpo ha emitido el siguiente dictamen:

Excmo. Sr. En cumplimiento de las Reales órdenes de 1.º de Julio y 12 de Octubre últimos, ha examinado la Sección el expediente promovido por don Eliseo Valcárcel contra un acuerdo de la Comisión provincial de Murcia, sobre continuación de unas obras en una casa de su propiedad, sita en el término municipal de Mula, núm. 1.º.

En 27 de Mayo de 1876 expuso el reclamante al Ayuntamiento que en el año anterior había empezado a construir ciertas obras en una casa que posee en los baños de Mula, y que por orden del Alcalde y cuando ya estaban muy adelantadas, no faltando más que poner la cubierta, se le mandó suspenderlas por no haber cumplido lo dispuesto en el artículo 1.º de las Ordenanzas municipales, que nunca se había exigido, para la construcción de aquel barrio distante de la población que según el plano, piteo, tante, por lo cual habían acudido en queja al Gobernador, puesto que no era aplicable al caso el citado artículo, y que seguidos varios trámites, la Comisión provincial había acordado que el expediente del asunto correspondía, en pri-

mer término a la Corporación municipal, por lo que y a fin de que no se le causaran más daños y perjuicios con la paralización de las obras, y sin renunciar a los derechos que pudieran corresponderle, suplicaba que se le dejara en libertad de continuarlas, concediéndole la oportuna autorización. En 1.º de Mayo de 1877, el Ayuntamiento de Mula, acordó, el Ayuntamiento autorizar a Valcárcel para continuar la obra comenzada, pero con la condición de modificar la esquina de la pared frontal de la parte Norte, internándola en una extensión de un metro, 45 centímetros, en calificación hacia la parte de Medio día, quedando así en línea recta con las demás fachadas de la casa.

Fundó tal relación en que el reclamante, por la construcción que había comenzado destruyó por completo una casa pequeña que había existido en aquel sitio, y al levantarla de nuevo sobre los mismos cimientos le dio triple elevación, sin cumplir lo dispuesto en el artículo 1.º de las Ordenanzas, que eran aplicables no solo al caso de la población, sino también a todos los barrios, y especialmente al de los baños, que por la afluencia de forasteros exigen más escrupulosidad en la observación de la alineación, añadiendo que la tendencia del solicitante se encaminaba desde su origen a prescindir de la Autoridad para que prevaleciera el hecho consumado.

El interesado interpuso recurso de alzada, alegando que con la determinación del Ayuntamiento se le causaban perjuicios, porque a las operaciones de remeter la fachada de la casa en un espacio tan considerable, iriéndose de un edificio de cortas dimensiones, seguía inevitablemente el derribo de paredes interiores y del lado opuesto que las citadas legales del acuerdo eran imperitantes: que en el barrio de los baños de Mula no había plano a que atenerse, y que por tanto era inútil hablar de alineaciones, y no podían tener aplicación las Ordenanzas municipales.

La Comisión provincial, después de oír al Ayuntamiento, al Arquitecto de la provincia y a Valcárcel, y considerando que el asunto era de la exclusiva competencia del Ayuntamiento, y que no se había infringido la ley, acordó confirmar el fallo apelado, y que se abonase a D. Eliseo Valcárcel la indemnización que correspondiera con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.º de las Ordenanzas municipales. Contra este acuerdo se recurre en alzada, reproduciendo extensamente las razones ya alegadas ante el Ayuntamiento y Comisión provincial, y acompañando un plano general del sitio de los baños de Mula, en el que se indica la línea de alineación que se propone, y que indudablemente es de la exclusiva

competencia de los Ayuntamientos, todo lo que en los términos municipales respectivos se refiere a la apertura, arreglo y alineación de calles y plazas, facultad que les está cometida por la ley orgánica Municipal, art. 67 de la ley Municipal de 1870, y 72 de la de 1.º de Octubre último; pero esta facultad no es ilimitada, sino que necesariamente se ha de hallar restringida cuando existan derechos adquiridos por un tercero, de otra manera el capricho de las Corporaciones municipales vendría a ser el árbitro de estos.

En efecto, la alineación de una calle, de una plaza o de cualquier otra vía de comunicación, así como su apertura y arreglo, puede recaer sobre terrenos propios del pueblo o de los particulares. En el primer caso los Ayuntamientos, al tener primera alineación, obran dentro de sus atribuciones, al dirigirla por donde los estimen más conveniente, guardando los preceptos que la legislación general establece.

En el segundo caso los Ayuntamientos hacen uso de sus atribuciones, y disponen de un terreno de su propiedad, por lo cual y mientras no se opongan a la ley, ni a una convención preexistente, es válido y ejecutivo lo que acuerden. Pero una vez establecida la alineación, si han nacido derechos de tercero, como, por ejemplo, el de un vecino que compró unas parcelas contiguas a la proyectada vía para construir en ellas, entonces no se puede variar la alineación, a no mediar un convenio entre los interesados o una indemnización de daños y perjuicios.

En el caso segundo, o sea cuando la alineación, arreglo o apertura de la vía pública afecta a los derechos privados por ocupar todo o parte de un terreno particular, es evidente que el proyecto no puede ni debe realizarse sin que preceda, mútuo convenio o la formación de un oportuno expediente de expropiación forzosa, so pena de infringir un precepto constitucional (art. 1.º de la ley fundamental del país).

De modo, que en este caso, además del expediente de alineación o arreglo de la calle, es necesario formar otro de expropiación forzosa.

Es preciso advertir que en esta clase de asuntos, además de tener presente el buen aspecto de las poblaciones, hay también necesidad de respetar los derechos privados y demostrar que las obras proyectadas son necesarias o útiles para el vecindario, de lo cual se introduce una gran desorden en el régimen municipal.

Hechas estas ligeras reflexiones, resulta de las disposiciones que se han dictado sobre esta materia, puestas en

armonía con la ley orgánica Municipal, que desde el año de 1870 amplió las atribuciones de los Ayuntamientos, por conferirles las leyes fundamentales del país el gobierno y dirección de los intereses de los pueblos respectivos, la Sección examinará concretamente el caso consultado.

D. Eliseo Valcárcel empezó a edificar sobre los cimientos de una antigua casa sin previa licencia, infringiendo el artículo 1.º de las Ordenanzas municipales de Mula, que disponen que siempre que haya de construirse un edificio de nueva planta o reformada se dará conocimiento a la Autoridad para que con acuerdo del Ayuntamiento y con presencia del plano de la villa, oídos los Maestros titulares, adopte las disposiciones convenientes, y prescriba las reglas oportunas con respecto a la alineación, altura y ornato público.

Verdad es que el barrio en que construía Valcárcel no tenía plano aprobado, pero esta circunstancia no le eximia de cumplir con el requisito de pedir permiso a la Autoridad municipal, tanto por que así lo determina el espíritu y la letra del artículo citado, y lo único a que podría dar lugar era que el Ayuntamiento al dictar el acuerdo no tuviera presente el plano, puesto que no existía, cuanto por que encomendado a los Ayuntamientos el cuidado de la policía urbana, sería este ilusorio y nulas las disposiciones que consigna la ley Municipal en esta materia si los particulares verificasen obras sin previa licencia cuando no hubiera un plano preexistente.

Sentado este principio, que la sección consigna únicamente para desvanecer cualquier duda que en lo sucesivo pudiera ocurrir en cuanto a la previa licencia para construir cuando no existan planos, encuentra que Valcárcel comenzó después su error solicitando la licencia en 27 de Mayo de 1876, cuando ya había edificado hasta el tercer piso, según dice.

Si de censurar es la omisión del Valcárcel, no lo es menos la conducta del Alcalde de Mula al dejar trascurrir un tiempo tan considerable sin ordenar la suspensión de la obra, tanto más, cuanto que como dueño de la casa, contigua fué avisado por aquel antes de dar comienzo a las obras, según repite en sus instancias, y lo cual acusa, si no mala fe, cuando menos falta de celo, y negligencia en el desempeño del cargo que le está confiado.

Pedida la licencia, es el hecho que el Ayuntamiento la otorgó, pero con una condición, la de remeter una de las esquinas de la casa un metro y 45 centímetros para que se llevara a cabo una

alineación que fue acordada al mismo tiempo.

El Ayuntamiento, en uso de sus atribuciones, pudo conceder la licencia aun después de empezada la obra, por más que parecía anómala, pero en manera alguna pudo acordar la alineación de la calle en el sentido que lo verificó si no procedía antes a la liquidación del expediente de expropiación forzosa de la parte de terreno de propiedad particular, y recalcó providencia mandando expropiar por causa de conveniencia y utilidad pública, según se comprende fácilmente aplicando los principios generales que la Sección deja consignados.

De modo que el acuerdo del Ayuntamiento fue legal en cuanto concedió la licencia, pero infringió la ley en las demás partes que comprende, y como la condición impuesta a Valcarlos es imposible, de derecho interin no se subsane el defecto de que adolece, debe entenderse como no puesta, y por tanto, el dueño de la obra en facultad de continuarla.

En virtud de lo expuesto, opina la Sección que se debe dejar sin efecto el acuerdo apelado en cuanto confirmó el Ayuntamiento, reservando al interesado sus derechos para que si lo estima oportuno los alegue ante quien corresponda, resolviéndose lo oportuno.

Y resolviéndose S. M. el Rey (Q. D. G.) con el preliario dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo a V. S. con devolución del expediente de su referencia, para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 13 de Diciembre de 1877.—Romero y Robledo.

Sra. Gobernadora de la provincia de Murcia.

(Gaceta núm. 23.)

MINISTERIO DE FOMENTO.

Exposición.

Señor: El Real decreto de 6 de Julio último fija las épocas de matrícula ordinaria y extraordinaria en las Universidades e Institutos de segunda enseñanza, y las fechas en que deben cerrarse los registros.

Terminados los plazos legales y declarada la validez de matrículas anteriores, según lo dispuesto sobre el particular, ni podían admitirse otras nuevas cumpliendo las prescripciones del decreto, ni quedaba medio hábil de formalizarlas, una vez destruidos los sellos especiales que acreditan el pago de los derechos. En estos momentos, sin embargo, de general regocijo, de placeres y felicitaciones por el fausto acontecimiento del Régio enlace, equitativo es conceder gracia a los jóvenes que, aplicándose al estudio con nuevo ardor, aspiran a recuperar el tiempo perdido, y evitar los perjuicios que de otro modo habrían de sufrir en su carrera.

Con tal fin, y considerando que establecida y practicada la regla formal y severa de las matrículas, una excepción en circunstancias tan especiales y solemnidades no ha de perturbar el buen orden de la enseñanza ni la disciplina escolar, el Ministro que suscribe tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 21 de Enero de 1878. — Señor: A. L. R. P. de V. M., C. El Conde de Toreno.

REAL DECRETO.

Atendiendo a las consideraciones que Me ha expuesto mi Ministro de Fomento,

Vengo en decretar lo siguiente:

Art. 1.º Quedan autorizados los Rectores y los Jefes de los demás establecimientos de enseñanza pública para declarar la validez de matrículas de cursos anteriores y conceder las de este año académico con carácter de extraordinarias, abonando en tal concepto dobles derechos en papel de pagos al Estado donde no se satisfagan en metálico, de los alumnos que lo solicitaren antes del día 10 del próximo mes de Febrero y acrediten los requisitos legales.

Art. 2.º Por este año, y sin que sirva de precedente, los alumnos que hubieren formalizado sus matrículas en época extraordinaria, serán admitidos a la prueba de curso en Junio próximo, expidiéndose al efecto papeletas especiales de examen libres de derechos.

Dado en Palacio a veintuno de Enero de mil ochocientos setenta y ocho.—Alfonso.—El Ministro de Fomento, C. Francisco Queipo de Llano.

EXPOSICION.

Señor: En las gracias y distinciones honoríficas con que es costumbre solemnizar los faustos acontecimientos del país, tienen merecida y justa participación los jóvenes que se dedican al cultivo de las letras y las ciencias, llamados a servir e ilustrar un día a la patria con sus luces y virtudes.

Siguiendo tan loable ejemplo, e interpretando los nobles y elevados sentimientos de V. M., su amor a la juventud estudiosa y su predilección por cuanto tiende a difundir la cultura intelectual y moral, el Ministro que suscribe ha formulado y tiene el honor de someter a la superior aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto, por el cual se conceden recompensas a los alumnos de los establecimientos de enseñanza pública que se distinguen por su conducta, aplicación y aprovechamiento, a fin de que sirvan de estímulo a todos y de satisfactoria y grata memoria del Régio enlace.

Madrid 21 de Enero de 1878. — Señor: A. L. R. P. de V. M., C. El Conde de Toreno.

REAL DECRETO.

Atendiendo a las consideraciones que Me ha expuesto mi Ministro de Fomento,

Vengo en decretar lo siguiente:

1.º Se concederán títulos académicos y profesionales libres de derechos y diplomas de honor a los alumnos que más se distinguen en los establecimientos públicos de enseñanza, sin perjuicio de los premios establecidos por los reglamentos.

2.º En la Universidad de Madrid se concederá un título de

Doctor por cada Facultad y Sección y en todas las del Reino uno de Licenciado; en los Institutos de Madrid que se sostienen de fondos generales con los Colegios agregados uno de Bachiller, y en las Escuelas superiores y profesionales uno, pe- ricial o de carrera.

3.º Cuando el número de alumnos, adornados de los requisitos necesarios para aspirar al premio, excediese de 15 en un grado de enseñanza o en una Escuela, se concederá un título más, aumentando sucesivamente el número en igual proporción.

4.º En las Escuelas superiores que preparan para profesiones libres, y en las de primera enseñanza de niños y de niñas, se concederán diplomas de honor, en primera enseñanza uno por cada 20 alumnos. Los de las Escuelas superiores serán expedidos por el Ministro de Fomento, y los de los de primera enseñanza por los Gobernadores de las respectivas provincias, como Presidentes de las Juntas de Instrucción pública.

5.º Tendrán opción a los títulos académicos y profesionales con exención de derechos los alumnos que practiquen en este curso académico los ejercicios del grado o del examen de carrera con nota de sobresaliente, y los que los hayan practicado con igual censura en los dos años últimos. Podrán aspirar al diploma de honor los alumnos de las Escuelas superiores que se hallen en idénticas circunstancias.

6.º En las Escuelas de primera enseñanza se contendrá el diploma al alumno que aventaje a los demás en los exámenes.

7.º Para la concesión de títulos y diplomas se abrirá en concurso el último día lectivo de este año escolar en los establecimientos en que los estudios están sujetos a cursos académicos, y se admitirán solicitudes hasta dos días después de terminar los ejercicios de grado o de examen de carrera.

8.º Las solicitudes documentadas de los aspirantes se presentarán al jefe de los respectivos establecimientos, el cual, conforme al parecer del Claustro de las Facultades y Secciones respectivas, o de las Juntas de Profesores reunidas bajo su presidencia, designará los alumnos más beneméritos, y lo pondrá en conocimiento de la Superioridad por el conducto ordinario para su aprobación, y publicar los nombres de los agraciados por medio de la Gaceta de Madrid.

9.º En los primeros días de Marzo próximo se celebrará examen público en las Escuelas de niños y niñas bajo la Presidencia de la Junta de primera enseñanza, o de las personas que delegan cuando las Escuelas fueren más de una, para designar los alumnos sobresalientes, sin distinción de clases ni secciones, teniendo en cuenta la edad y tiempo de asistencia en la Escuela.

10.º Las Juntas en vista del resultado de los ejercicios a que hubieran asistido o de las notas de sus delegados, oyendo a

los Maestros respectivos, acordarán los premios y darán conocimiento a los Gobernadores para la expedición de los diplomas que le serán remitidos al efecto. Los nombres de los alumnos premiados se publicarán en los Boletines oficiales.

Dado en Palacio a veintuno de Enero de mil ochocientos setenta y ocho.—Alfonso.—El Ministro de Fomento, C. Francisco Queipo de Llano.

Gaceta núm. 30.)

REAL ORDEN.

Hmo. Sr.: He dado cuenta a S. M. el Rey (Q. D. G.) de una comunicación del Rector de la Universidad de Granada, en que consulta si los Maestros que han obtenido Escuelas públicas de la categoría de oposición sin este requisito, tienen derecho a los ascensos en su carrera si después le han cumplido.

Vistos los artículos 185 y 187 de la ley de 9 de Setiembre de 1857, el párrafo tercero de la regla 7.ª de la Real orden de 10 de Agosto de 1858, y 1.º y 10 de la del Regente de 1.º de Abril de 1870.

S. M., para legalizar la situación de aquellos Profesores y evitar que en lo sucesivo se verifiquen nombramientos de Maestros sin tener presente lo que previenen las disposiciones citadas, se ha servido resolver lo siguiente:

1.º Los Maestros y Maestras que sin haber ingresado en el Magisterio por oposición han obtenido por concurso Escuelas públicas de esta categoría, y después han practicado y sido aprobados en oposiciones, se les considerará para sus ascensos en la carrera como si las hubieren conseguido por este medio.

2.º Los Maestros y Maestras que no hayan hecho dichos ejercicios después de haber sido nombrados para las Escuelas que regentan lo verificarán en las primeras oposiciones que se celebren en la provincia respectiva, quedando los que no se presenten, o no sean aprobados, en concepto de interinos, anunciándose inmediatamente las vacantes de dichas Escuelas para proveerlas por oposición, y disfrutando los que fuesen aprobados de los beneficios concedidos en la regla anterior.

3.º Los Maestros y Maestras que desempeñen Escuelas públicas que por las disposiciones vigentes no correspondan a la categoría de oposición no podrán en ningún caso ascender por concurso a estas.

4.º Los Rectores de las Universidades, las Juntas de Instrucción pública y los Inspectores de primera enseñanza cuidarán, en la parte que a cada uno se refiera, del exacto cumplimiento de lo prevenido en las disposiciones anteriores.

De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid 16 de Enero de 1878.—C. Toreno.—Sr. Di-

rector general de Instrucción pública, Agricultura e Industrias.

(Gaceta núm. 31.)

MINISTERIO DE LA GUERRA

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Para cumplimiento de los Reales decretos de indulto de 22 del actual, expedidos por este Ministerio y por el de Gracia y Justicia, y publicados en la Gaceta del día siguiente, S. M. (Q. D. G.) ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.º Se hace extensivo a los condenados por los delitos militares el Real decreto de indulto de 22 del actual, expedido por el Ministerio de Gracia y Justicia.

Se exceptúan de la referida gracia los reos de los delitos de insulto a superiores y sedición, además de los expresados en el artículo 7.º del mismo decreto.

Art. 2.º Se aplicará la gracia de indulto a los desertores de primera vez y a los prófugos únicamente cuando la desertión o la no presentación hubiere tenido lugar antes del día 23 del actual y bajo las siguientes reglas:

1.º Si estuvieren ya condenados a la pena de recargo, se rebajará un año del tiempo de condena; o la quinta parte si esta excede de un año, y continuarán en el Ejército de la Península o de Ultramar, según les haya correspondido por su delito.

2.º Si se hallan presentes a disposición de las Autoridades militares, sin haber sido terminadas las causas respectivas, después de que se dicte en ellas fallo o providencia ejecutoria, se rebajará un año del tiempo de recargo; o la quinta parte si esta excede de un año a los que hubieren sido aprehendidos; y se indultará de toda pena a los presentados voluntariamente.

3.º A los desertores de primera vez actualmente rebeldes se les indultará de toda pena si hacen constar que se presentaron en los plazos de dos meses para la Península, cuatro en el extranjero y seis en Ultramar, marcados en el artículo 1.º del Real decreto de 22 del actual, y que, con el pasaporte y certificación facilitados por las Autoridades locales o Representantes de España en el extranjero, marcharon sin detención alguna a incorporarse a los cuerpos a que pertenecían.

A efecto, las Autoridades civiles pondrán los presentados a disposición de las militares correspondientes.

4.º Los prófugos que se presenten en los mismos plazos serán incorporados a un regimiento del

distrito y dulos de alta en el, previa identificación de las personas y declaraciones de prófugos hechas por las Diputaciones provinciales.

5.º Los desertores de la Península y prófugos que se presenten en Ultramar, y verifiquen su presentación en aquellas provincias para continuar allí sus servicios, ingresarán desde luego en el Ejército respectivo.

6.º Los sargentos y cabos no recuperarán el empleo que perdieron al desertar, conforme está prevenido por regla general, y quedarán obligados a servir de soldados.

Art. 3.º Si por efecto del indulto algún sargento, cabo o soldado resultare cumplido de su condena en algún establecimiento penal antes de haberle correspondido en el orden regular obtener su licencia del servicio militar, deberá observarse lo que para tales casos previene el art. 7.º de la Real orden circular de 13 de Febrero de 1875.

No podrán ser rehabilitados y vueltos al servicio militar los que hubiesen salido definitivamente de él por exigirlo así la naturaleza de las penas a que fueron condenados.

Art. 4.º Respecto a aquellos que por consecuencia del indulto queden libres de toda pena y perteneciendo al Ejército, surtirán la gracia sus efectos para el abono de tiempo y antigüedad de día 23 del actual. Se exceptúan de esta regla los desertores y prófugos a los cuales sólo podrá abonarse como servido el tiempo anterior a la desertión y el posterior a su presentación.

Art. 5.º La aplicación del indulto, tanto a los desertores y prófugos como a los que se hallen sufriendo arresto o prisión en prisiones militares por sentencia de Consejo de guerra o providencia gubernativa, o cumpliendo su condena en algún establecimiento penal, corresponderá a los Capitanes generales respectivos, con precisa audiencia de sus Auditores.

Art. 6.º Los Jefes de los establecimientos penales remitirán con la posible brevedad a los Capitanes generales de los distritos y Comandante General de Ceuta (las hojas histórico-penales de los comprendidos en la Real gracia de indulto con los informes correspondientes).

Art. 7.º Los Capitanes generales de distrito y el Comandante general de Ceuta, luego que terminen la aplicación del presente indulto, remitirán al Consejo Supremo de la Guerra un estado nominal de todos los penados a quienes lo hubieren aplicado, con expresión de las circunstancias que motivaron el alto Cuerpo dará cuenta individual al Ministerio de la Guerra de todos los Oficiales

del Ejército y sus asimilados que obtengan la gracia de indulto, con expresión también de las circunstancias.

Art. 8.º Este Ministerio resolverá, sin ulterior recurso, las reclamaciones y consultas a que den lugar las disposiciones de los precitados Reales decretos de 22 del actual que se acompañan en copia, y de esta Real orden.

De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento en la parte que le toque.

Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 31 de Enero de 1878. —Ceballos.—Señor.

(Gaceta núm. 17.)

MINISTERIO DE HACIENDA

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Enterado S. M. el Rey (Q. D. G.) del expediente consultado por esa Dirección general, e instruido con motivo de la queja elevada a la misma por D. Ambrosio Gonzalez, por sí y a nombre de D. José Penelas, a consecuencia de haberles negado la tenencia de Alcaldía del distrito de Buenavista de esta Corte las cédulas personales si no acreditan haber corrido la suerte de soldados o no depositan en su defecto 2.000 pesetas, atendiendo se sin duda a las prescripciones de la Real orden de 17 de Julio de 1861, en cuyo art. 11 se prohíbe expedir cédulas de vecindad; no pudiendo considerarse vigente esta disposición, y atendiendo a que el impuesto de cédulas personales, para cuyo planteamiento y desarrollo, exclusivamente encomendado al Ministerio de Hacienda, se halla autorizado el Gobierno por el art. 11 de la ley de Presupuestos de 21 de Julio de 1876, se encuentra establecido según reglas diferentes de las que podrían hallarse en armonía con el espíritu y disposiciones de la citada Real orden; S. M. se ha servido resolver que por ese Centro directivo se den las órdenes necesarias para que no se nieguen las cédulas personales a los que la solicitan en casos semejantes al de que se trata en el expediente que motiva, ni se les exijan certificaciones ni fianzas.

De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos correspondientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 31 de Diciembre de 1877. —Ororio.

Sr. Director general de Impuestos.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

REALES DECRETOS

Visto el expediente instruido con motivo de la instancia elevada por María Robles pidiendo que se indulte a su hijo Ignacio Ortiz de la pena de un año de prisión correccional y multa de 200 pesetas que la Audiencia de Sevilla le impuso en causa por el delito de desacato a la Autoridad.

Considerando que el reo observó una conducta ejemplar antes de cometer el delito; ha dado después pruebas de arrepentimiento, y lleva sufridas más de las cinco sextas partes de su condena:

Teniendo presente lo dispuesto en la ley provisional de 18 de Junio de 1870, que dictó reglas para el ejercicio de la gracia de indulto:

De acuerdo con lo informado por la Sala sentenciadora, con lo consultado por el Consejo de Estado y con el parecer de mi Consejo de Ministros:

Vengo en indultar a Ignacio Ortiz del resto de la pena de un año de prisión correccional y multa de 200 pesetas que le fué impuesta en la causa de que va hecho mérito.

Dado en Palacio a catorce de Enero de mil ochocientos setenta y ocho. —Alfonso.—El Ministro de Gracia y Justicia, Fernando Calderón y Collantes.

Vista la exposición elevada por la Sala de lo criminal de la Audiencia de Valladolid, en la cual, usando de las facultades que le concede el art. 2.º del Código penal vigente, propone que se commute por la pena de seis meses de arresto mayor la de 12 años y un día de cadena que el referido Tribunal impuso a don Toribio Martínez Marcos en causa por el delito de falsificación de un documento:

Considerando que el reo ha observado buena conducta antes y después de delinquir; tiene 77 años; obró sin malicia, y no resultó perjuicio alguno:

Teniendo presente lo dispuesto en la ley provisional de 18 de Junio de 1870, que reguló el ejercicio de la gracia de indulto:

De acuerdo con lo propuesto por la Sala sentenciadora, con lo consultado por el Consejo de Estado y con el parecer de mi Consejo de Ministros:

Vengo en commutar la pena de 12 años y un día de cadena impuesta a don Toribio Martínez Marcos en la causa de que va hecho mérito por la de seis meses de arresto.

Dado en Palacio a catorce de

Enero de mil ochocientos setenta y ocho.—Alfonso.—El Ministro de Gracia y Justicia, Fernando Calderon y Collantes.

CUARTA SECCION.

ADMINISTRACION ECONOMICA

DE LA PROVINCIA DE LA CORUÑA.

Se anuncia de nuevo la subasta del Boletín oficial de ventas de bienes nacionales de esta provincia para el día 28 de Febrero próximo.

No habiendo tenido licitador la subasta celebrada el día 6 de Agosto último de la contratación del Boletín oficial de ventas de bienes nacionales de esta provincia por el tipo de 7 céntimos de peseta pliego de impresión, se anuncia nuevamente con 2 céntimos de peseta más de aumento sobre aquel, según autorización de la Dirección general de propiedades y derechos del Estado de 8 del actual, para que tenga lugar la subasta a las doce del día 28 de Febrero próximo, bajo las condiciones designadas en el pliego que se halla de manifiesto en la Comisión investigadora de ventas de esta provincia y publicado en los Boletines oficiales de la misma de 26, 27 y 28 de Julio últimos, en los de Pontevedra de 1.º y 2.º de Agosto de 1877 y 3.º y 5.º de Julio siguientes respectivamente y en la Gaceta de Madrid del día 4 de dicho mes, con la modificación en la condición 10.ª de 9 céntimos de peseta, tipo de esta subasta, en lugar de los 7 que constan, remitiendo al efecto el Boletín de Licitadores, harán las proposiciones en pliegos cerrados con doble sobres, depositando en el segundo interior, su objeto, pudiendo dirigirlas por el correo o entregármelos en la primera hora que principie el remate, teniendo presente al efecto dicho pliego de condiciones. Coruña 20 de Enero de 1878.

P. I., Félix M. Platero.

QUINTA SECCION.

AYUNTAMIENTOS.

Orense.

De once a doce de la mañana del día 10 de Febrero próximo, tendrá efecto en la casa consistorial de esta ciudad la venta de 31 arboles sitos en la Alameda del Concejo y 34 en el Campo de la Feria, los cuales se hallan reservados en el expediente inscrito al efecto, sirviendo de tipo para la subasta la cantidad de 208 pesetas 50 céntimos los primeros y 4 pesetas 25 céntimos los últimos.

Lo que se hace público para

conocimiento de las personas que quieran interesarse en la adquisición de los mencionados arboles. Orense 30 de Enero de 1878. El Alcalde, J. Segundo Puga.

SESTA SECCION.

AUDIENCIA DE LA CORUÑA

PRESIDENCIA.

Don José María Dorado, de la Vega, Secretario honorario de S. M. y Escribano de Cámara de la Audiencia territorial de Galicia.

Certifico: que el expediente de competencia promovido entre los Jueces de primera instancia de Cambados y el de Caldas de Reyes, sobre conocer de la causa mandada formar a Agustín Carballo, Alvaro Loureiro y José Iglesias por falso testimonio, ha sido decidida en este Tribunal por el auto que dice así:—Sres. D. Ceferino E. de Boneta, D. Jacobo Pérez Irujo, D. Celestino Sagarminaga.

Resultando: que deducido testimonio para proceder criminalmente contra Agustín Carballo Rey, y Alvaro Loureiro, por el delito de falso testimonio cometido en declaraciones prestadas por los mismos en el partido judicial de Caldas de Reyes, en causa que se seguía en el Juzgado de Cambados, así como contra José Iglesias, que presentó dichos testigos se ha suscitado competencia negativa entre ambos juzgados, sosteniendo el de Cambados que el conocimiento de la causa, que ha de instruirse, corresponde al de Caldas de Reyes, puesto que en su partido se prestaron las declaraciones constitutivas del delito de que se trata, y sosteniendo a su vez el último que corresponde a aquel, por cuanto José Iglesias ejecutó en Cambados el hecho de ofrecer la prueba, y señalar los testigos, que después y por virtud del exhorto declararon en Caldas, lo cual equivale a haberlos presentado.

Considerando: que según lo dispuesto en el artículo 325 de la ley orgánica del poder judicial la competencia para la instrucción de las causas y castigo de las faltas y de los delitos corresponde a los Jueces y Tribunales de la demarcación en que aquellos se hubieran cometido.

Considerando: que si bien José Iglesias ofreció la prueba y designó los testigos en el Juzgado de Cambados donde se sustanció la causa originaria, las declaraciones de aquellos, fueron prestadas en el partido de Caldas a virtud de exhorto, y consistiendo el delito en la falsedad, en que incurrieran en el acto de rendir dichas declaraciones, es indudable que el hecho criminal que ha de perseguirse, tuvo lugar en el Juzgado de

Caldas y que este según el artículo antes citado es el único competente para perseguirlo, y proceder contra todos los responsables del mismo.

De conformidad con lo propuesto por el Ministerio Fiscal, se declara que es competente para la instrucción de la causa de que se trata el Juez de primera instancia de Caldas de Reyes, a quien se remitan las actuaciones previas las citaciones y emplazamientos oportunos a cuyo fin librase la correspondiente certificación al Juez de primera instancia de Cambados y publíquese esta resolución dentro del término de quince días en los Boletines oficiales de las provincias del distrito de esta Audiencia. Lo mandaron y firman los señores que a continuación se expresan. Coruña Enero 10 de 1878.—Ceferino E. de Boneta.—Jacobo Pérez Irujo.—Celestino Sagarminaga.—Relator Licenciado Domingo Aguado.—El Escribano de Cámara José María Dorado.

SEPTIMA SECCION.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA.

Don Alfonso XI, Rey constitucional de España y en su nombre D. Vicente Ballesteros Gil, Juez de primera instancia accidental del Juzgado de Caldas de Reyes.

Hago público: que la noche del 21 al 22 del corriente, fué robada la Iglesia parroquial de Santa María de Curro, quemando al efecto la puerta principal y los ladrones sustrajeron un mantel de altar y en su consecuencia ruego a todas las autoridades civiles, militares y agentes de policía judicial, procedan a la busca y captura del sujeto o sujetos en cuyo poder fuere hallado dicho mantel.

Caldas Enero 23 de 1878.—Vicente Ballesteros.—D. O. de S. S. Ramon Gomez Paseiro.

ANUNCIOS.

GUIA DE QUINTAS

D. EUSEBIO FREIXA Y RADASO,

Jefe honorario de Administración civil autor de varias obras administrativas y literarias.

SEPTIMA EDICION.

CONTIENE:

toda la tramitación de los expedientes para los reemplazos del Ejército; de sustitución; de redención; de competencias; de exenciones legales; de prófugos; de exenciones sobrevenidas después de estar sirviendo los interesados; la ley de Reemplazos del Ejército de 30 de Enero de 1856 con las modificaciones introducidas

en ella por la ley de 1.º de Marzo de 1862 y de 10 de Enero de 1877, que también se inserta íntegra, y profusión de citas, y un gran número de reales órdenes que se han dictado sobre la primera y gran jurisprudencia; las de 10 de Enero de 1877; de 7 de idem; idem para el servicio de los buques de la Armada; de recompensas militares de 8 de Julio de 1860; de redenciones y enganches de 27 de Abril de 1870, modificando la de 24 de Junio de 1857, refundida en aquella; el mismo decreto e Instrucción de 18 de Enero de 1877 para los reemplazos de la marinería; el decreto de 26 de Mayo de 1874 con el Reglamento y cuadro de los defectos físicos que inutilizan para el servicio militar; el de 18 de Enero de 1867 sobre alcances de los fallecidos en Ultramar y documentos que se requieren para su percibo; artículo 6.º de la ley de 3 de Junio de 1868 sobre fomento de la Agricultura y población rural, y finalmente otras varias Reales disposiciones que se insertan por su mucha importancia, inclusa una de 19 de Noviembre de 1875 dictando reglas para la instrucción de los expedientes que se instruyan a fin de conceder o no exenciones ocurridas después de estar sirviendo los mozos en el Ejército, etc.

Esta, tanto en Madrid como en las principales librerías de provincias, en que se halla de venta, 10 rs.

De esta y de las demás obras del mismo autor, pueden hacerse los pedidos acompañando el importe en letras, libranzas o sellos, y 2 rs. más para gastos de envío, poniendo el sobre a la correspondencia de este modo: Sr. D. Eusebio Freixa, Cava Baja, 22, principal izquierdo, Madrid.

Leyes orgánicas municipal y provincial de 20 de Agosto de 1870, con la modificación de un texto de la de 16 de Diciembre de 1876, publicadas en cumplimiento de la ley y Real decreto de 2 de Octubre de 1877. Contiene extractos al margen de cada uno de sus artículos, é inñal de citas importantes. Libro utilizable como apéndice al prontuario de la Administración municipal, su precio 7 rs.

Legislación para todos.—Apéndice a las obras tituladas: Leyes orgánicas municipal, y provincial y Prontuario de la Administración municipal. Contiene la Instrucción vigente de Contabilidad de los Ayuntamientos, de 20 de Noviembre de 1875; las leyes, decretos, instrucciones y Reglamentos, etc., que se citan en dichas leyes, y además, relacionadas con extensión unas, extractadas fielmente otras y copiadas muchas, las leyes y otras disposiciones de Policía urbana sobre construcciones, Policía rural, Montes, Beneficencia, Instrucción primaria, Cementerios y Aguas, su precio 10 rs.

Guía de censos: 7.ª edición, publicada en Agosto de 1877, su precio 8 rs.

Guía de la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería, con formularios útiles sinas, tanto para el nombramiento de peritos como para la redacción de reportes, cartillas, amilaramientos, reclamaciones de agravio, expedientes que se incoan en los casos de pedriscos, inundaciones, etc., y además la legislación del ramo en extracto. Forma un libro de 224 páginas en 4.º, su precio 12 rs.—Apéndice a la misma, con el novísimo Reglamento y modelos 2 rs. Este se vende únicamente a los que hayan adquirido y adquieran la Guía. Ambos cuestan 14 reales.

Rectificación de los amilaramientos de la riqueza rústica, urbana y pecuaria, consistente en el Reglamento de 19 de Septiembre de 1876 y sus modelos correspondientes, etc., etc. Forma un tomo en 4.º de 110 páginas y cuesta 3 rs.

Guía de Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, obra utilísima con muchos formularios, su precio 8 rs.

Guía de elecciones, su precio 2 rs.

Aziliario de buques, 2.ª edición hecha en 1874, su coste 4 rs.

Guía práctica de la contribución industrial, 4 reales.

A voluntad de su dueño se vende una casa meson situada en la parroquia de Carballada de Avia, término de San Cristóbal de Regodeigón, conocido por la Rotca, en la carretera que va del Carballino a Ribadavia; don Miguel Buceta, en el mismo Ribadavia, dará razón del precio y demás condiciones de la venta.

IMP. DE L. J. J. Y A. UTERO.